

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1

El día 5 de noviembre de 2015 se publicó en el BON la Resolución de la Directora General de Función Pública por la que se aprobaba la convocatoria de oposiciones de 20 plazas de Auxiliar administrativo.

El día 11 de enero de 2016, se publicó en el BON una Resolución de la Directora General de Función Pública por la que se modificaba la convocatoria anterior, ampliando el número de plazas convocadas hasta 50.

El día 15 de enero de 2016, don Aitor Chavarri presentó un recurso de alzada frente a la citada Resolución de modificación de la convocatoria, alegando que se le había causado un perjuicio irreparable por no abrir nuevo plazo de presentación instancias, ya que de conocer el número exacto de plazas convocadas él hubiese presentado instancia de participación.

Posteriormente, el 27 de mayo de 2016 se publica en el BON una nueva Resolución de la Directora General de Función Pública por la que se modifica la antedicha convocatoria de oposiciones de Auxiliar administrativo, en el sentido de sustituir el contenido de un tema de los 40 que contiene la convocatoria, y se abre un nuevo plazo de presentación de instancias.

Una vez que los aspirantes admitidos han realizado las pruebas de la oposición, el día 1 de septiembre de 2016 se han publicado los resultados del proceso selectivo.

Dentro del mes siguiente a ésta publicación, se han presentado tres escritos por los aspirantes:

Doña Uxue Lizarraga, aspirante suspendida, presenta escrito de recusación, alegando que una Vocal del Tribunal es prima carnal de uno de los aspirantes aprobados en la oposición.

Don Beñat Gainza, aspirante suspendido, presenta escrito pidiendo que se inicie la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de la Resolución de la Directora General de Función Pública por la que se modifica el temario de las oposiciones, argumentando que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

Doña Irati Ayestarán, aspirante suspendida, presenta una solicitud reclamando una indemnización, alegando que una de las preguntas del examen era sobre el tema modificado y que la validez de esa pregunta ha sido determinante en el resultado de su puntuación y en la no superación del proceso selectivo.

En este momento la Administración tiene que resolver sobre todos los escritos y peticiones de los cuatro reclamantes, por lo cual, se solicita que informe sobre todos ellos.

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2

Mediante Resolución 120/2015, 20 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, se concede a la empresa S.M.3.0 S.A una subvención de 9.000 euros para un proyecto de modernización empresarial.

Según lo dispuesto en las bases reguladoras de la convocatoria, la empresa beneficiaria de la subvención debía cumplir, entre otras, la siguiente obligación:

- a) Facilitar la comprobación de la realización de las acciones objeto de subvención, aportando la documentación y aclaraciones que se le soliciten.

Con fecha 20 de enero de 2016, dentro del plazo previsto en la convocatoria, la empresa beneficiaria de la ayuda presenta documentación sobre los gastos subvencionables realizados y solicita el pago de la ayuda. La documentación presentada es analizada por el órgano gestor de la ayuda que considera insuficientemente acreditada la justificación de los gastos por ser la cuenta justificativa presentada inexacta e incompleta.

Con fecha 25 de enero de 2016 el órgano gestor de la ayuda requiere a la empresa beneficiaria de la ayuda para que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, presente diversa documentación y aporte una serie de aclaraciones sobre las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, así como el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Este requerimiento se notifica a la empresa con fecha 1 de febrero de 2016.

Dentro del plazo otorgado, la empresa aporta los libros contables y algunas aclaraciones en relación con los gastos realizados. Una vez analizada la documentación por el gestor de la ayuda se constata que no se ha presentado la documentación solicitada y las aclaraciones se consideran insuficientes, lo que da lugar a que, mediante Resolución 56/2016, de 26 de febrero, la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo inicie un expediente administrativo de pérdida del derecho al cobro de la ayuda por considerar que la empresa ha incurrido en un incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones y en las bases reguladoras de la subvención.

Por otra parte, mediante Resolución 57/2016, de 26 de febrero, la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo inicia un expediente administrativo sancionador frente a la empresa por una infracción grave en materia de subvenciones tipificada en el artículo 42.1.1 d) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. La resolución de inicio del expediente sancionador se notifica a la empresa con fecha 1 de marzo de 2016.

El expediente de pérdida del derecho al cobro de la ayuda finaliza, previa instrucción de expediente administrativo, con propuesta razonada del

centro gestor, acompañado de los informes y pruebas procedentes y de las alegaciones de la empresa beneficiaria, mediante Resolución 83/2016, de 29 de julio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo. Esta resolución se notifica a la empresa con fecha 11 de agosto de 2016.

El expediente administrativo sancionador finaliza, previa instrucción con práctica de prueba, alegaciones del beneficiario, propuesta de resolución y trámite de audiencia a la empresa, mediante Resolución 94/2016, de 25 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo. Mediante esta resolución se impone a la empresa S.M.3.0 S.A una sanción de multa de 18.000 euros, así como la pérdida durante un plazo de dos años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones Públicas u otros entes públicos. Esta resolución es notificada a la empresa con fecha 31 de agosto de 2016.

Con fecha 12 de septiembre de 2016 la empresa S.M.3.0 S.A presenta dos recursos de alzada:

El primero contra la Resolución 83/2016, de 29 de julio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, notificada el 11 de agosto, por la que se declara la pérdida del derecho al cobro de la subvención. Aduce la mercantil recurrente que los medios previstos en las bases reguladoras de la ayuda para la justificación de la aplicación de los fondos públicos resultaban excesivos y que con la presentación de la documentación aportada y de los libros contables de la empresa quedaba suficientemente acreditada la realización de la actividad, así como que, si el órgano gestor estimaba insuficiente la documentación y acreditación presentada, debía de haber utilizado de oficio medios de verificación a través de Hacienda Tributaria de Navarra para hacer las oportunas comprobaciones.

El segundo recurso de alzada lo presenta frente a la Resolución 94/2016, de 25 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, notificada a la empresa con fecha 31 de agosto de 2016, por la que se le impone una sanción de multa de 18.000 euros, así como la pérdida durante un plazo de dos años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones Públicas u otros entes públicos.

Aduce en el recurso de alzada que la sanción impuesta no es conforme a derecho por los siguientes motivos:

1. La dependencia existente entre el procedimiento administrativo de pérdida del derecho al cobro y el procedimiento administrativo sancionador, impedía la apertura de este último sin que hubiese finalizado y adquirido firmeza en vía administrativa la resolución del primero.
2. Anulabilidad del procedimiento administrativo sancionador por caducidad del mismo.
3. Incorrecta tipificación de la infracción, dada la inexistencia de negativa y/o obstrucción por parte de la empresa a las labores de comprobación y control de la Administración.

4. Incorrecta graduación en la imposición de la sanción por haber apreciado la Administración reincidencia por la existencia de una resolución firme de reintegro de ayudas dictada con fecha 8 de septiembre de 2015 basada en el incumplimiento de la finalidad de una ayuda obtenida por la empresa para proyectos de modernización en la convocatoria de ayudas del año 2014.

Se solicita informe jurídico sobre todas las cuestiones expuestas en los recursos de alzada interpuestos que incluya conclusiones y actuaciones a realizar, si procede.

